

Violencia y criminalidad: ¿el problema insoluble de nuestra democracia?

“...hemos visto solo bandazos de populismo autoritario, como gobernadores apoyando la pena de muerte o alcaldes pidiendo militares en la calle. Quizás no sea tarde para evitar el declive democrático producto de la incapacidad para enfrentar la violencia y el crimen con las herramientas del Estado de Derecho...”.

ANDRÉS DOCKENDORFF

Instituto de Estudios Internacionales,
Universidad de Chile

En la segunda mitad del siglo pasado, un conjunto de democracias de América Latina se derrumbó, deviniendo en regímenes autoritarios. A partir del caso argentino, Guillermo O'Donnell estableció que dicho colapso se producía por un agotamiento del modelo industrializador, crisis en la balanza de pagos, inflación y endeudamiento, entre otras variables económicas. De igual forma, al explicar el quiebre democrático de 1973 en Chile, Arturo Valenzuela habló del “problema insoluble” de la economía.



Ahora bien, a diferencia del pasado, el “problema insoluble” de las democracias de la región en la actualidad parece ser la incapacidad para lidiar con la violencia y la criminalidad. Esto constituye una amenaza para la democracia. Como advierte el politólogo Larry Diamond (1999), el gobierno efectivo no es únicamente el que mantiene un buen desempeño económico, toda vez que los ciudadanos también priorizan su seguridad física. Ello supone la protección efectiva en contra de daños arbitrarios producidos por elementos criminales.

La evidencia comparada reciente muestra

que los crímenes violentos impactan negativamente en el apoyo a la democracia (Claassen y Magalhães, 2022). Los datos también indican que las personas se vuelven más proclives a favorecer la restricción de libertades cuando los gobiernos no son capaces de responder ante el crimen e inseguridad, o cuando son víctimas de delitos graves (Krause, 2014; Malone, 2010; Visconti, 2020). En casos más extremos, el miedo a la violencia y al crimen impulsa a las personas a apoyar medidas extrajudiciales.

Esta relación entre violencia y retroceso democrático no es nueva. Nancy Bermeo demostró que, en el período de entreguerras en Europa, la incapacidad del Estado en proveer orden público y la combinación de violencia y crimen extendido habrían incidido negativamente en la democratización, con las consecuencias que conocemos.

La actitud y conducta de las fuerzas políticas democráticas es clave para enfrentar esta amenaza. Lamentablemente, las señales no son alentadoras en nuestro país. Una parte del oficialismo ha cultivado por años un discurso que fomenta la inhibición del Estado en el control del orden público. Revertir el daño causado no es tan simple. Un primer paso podría ser que dejen de pensar en los “territorios” como comunidades imaginarias donde anidarían formas posmodernas de poder popular y verlos como lo que en realidad son en muchas partes: áreas controladas por el narco.

De acuerdo con una investigación de CIPER y la Universidad Diego Portales, solo en la Región Metropolitana hay 174 zonas (territorios) donde el narco ejerce capacidad de control. No está de más advertir la agravante desigualdad que subyace a ese fenómeno, porque son los pobres los que sufren más con el retraimiento del Estado.

Por su parte, la oposición tiene poco que celebrar. Primero, heredaría un problema que, a la vista, ha devenido en casi insoluble. Segundo, hasta ahora no han mostrado un plan específico y realista, lo que denotaría nuevamente una aproximación frívola a la principal preocupación de los chilenos.

En el futuro inmediato no observaremos golpes de Estado por la inseguridad y el crimen desbordado. Sin embargo, lo que se está fraguando es un creciente apoyo al populismo punitivo y a medidas extremas para enfrentar el crimen. Ello, casi siempre incluye renunciar a derechos básicos y termina arrastrando a la democracia.

Hasta ahora, hemos visto solo bandazos del populismo autoritario, como gobernadores apoyando la pena de muerte o alcaldes pidiendo militares en la calle. Quizás no sea tarde para reaccionar y evitar el declive democrático producto de la incapacidad para enfrentar la violencia y el crimen con las herramientas del Estado de Derecho. Para que esto no se transforme en un nuevo problema insoluble es necesario actuar sin infantilismo, en el oficialismo, y sin frivolidad, en la oposición.